

RUC 2001144474-2

RIT 35-2024

Ministerio Público con Cavieres Cavieres, Valeria Carolina

Homicidio simple

Santiago, nueve de julio de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

PRIMERO: Tribunal e intervinientes. Que ante la sala del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, presidida por el juez don Matías de la Noi Merino, e integrada por los magistrados doña Denisse Ehrenfeld Ebbinghaus y don Raúl Díaz Manosalva, se llevó a efecto la audiencia de juicio oral en la causa **RIT 35-2024, RUC 2001144474-2**, seguida contra la acusada **VALERIA CAROLINA CAVIERES CAVIERES**, cédula nacional de identidad N°13.446.042-3, chilena, nacida en Santiago el 27 de julio de 1978, 45 años, soltera, comerciante, domiciliada en calle Guanaco N°4367, comuna de Recoleta.

Sostuvo la acusación del Ministerio Público el Fiscal don **Ricardo Vergara**, mientras la asistencia del acusado estuvo a cargo de don **Andrés Rojas**, Defensor Penal Público.

SEGUNDO: Acusación del Ministerio Público. Se acusó por el siguiente hecho:

“El día 10 de noviembre de 2020, cerca de las 05:00 horas de la madrugada, la víctima Lorena Latín Quintana se encontraba en las inmediaciones de calles Antonia López de Bello y Recoleta, en la comuna de Recoleta, circunstancias en las cuales la imputada Valeria Carolina Cavieres Cavieres se acercó a ella para que le regalara droga, y ante la negativa de la víctima, la imputada tomó un cuchillo que portaba y la apuñaló en el cuello y en distintas partes del cuerpo, luego la golpeó con un palo y huyó del lugar. Minutos más tarde y a raíz de la agresión la víctima falleció en el bandejón central de Avenida Recoleta a causa de un traumatismo cervical por objeto cortopunzante.”

Se le imputó ser **autora del delito consumado de homicidio**, previsto y sancionado en el artículo 391 N°2 del Código Penal.

No concurrirían circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

Solicitó la imposición de una pena de **quince años de presidio mayor en su grado medio**, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e

inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y la incorporación de la huella genética de la imputada al Registro de Condenados.

TERCERO: Aperturas. En su apertura, el señor fiscal describió los hechos y la prueba en que sustentará su pretensión de condena.

La defensa, por su parte, indicó que deben examinarse detenidamente algunas pruebas que demuestran que la víctima era una persona conocidamente agresiva, con un problema de drogadicción grave, lo que sustenta que fue su representada la que se defendió de una agresión. En especial la declaración del testigo Vallejo, pareja de la víctima, más el informe de alcoholemia y toxicológico de la occisa, quien además se trataba en el hospital Horvitz. Su defendida declarará al respecto y además colaboró con la investigación policial.

CUARTO: Declaración de la acusada. Renunció a su derecho a guardar silencio la acusada y manifestó espontáneamente que vivió mucho tiempo en calle Antonia López de Bello. Una noche, tomando, ella -la rubia- siempre la molestaba cuando trabajaba. Llegó ese día “un caballero con plata”, y ella la insultó y la agredió. La echó, “la rubia” no quería irse, entonces le empezó a tirar palos a “la rubia” y le dio dos puntazos en la guata; luego le pegó con un palo en la cabeza porque ya la tenía aburrida. La seguía, ella continuaba echándola. En la iglesia de calle Antonia López de Bella “la rubia” se sentó en la cuneta con un gallo, la insultaba hacia su carpa, ahí le respondió “maraca culiá, muérete”, “la rubia” siguió sentada, entonces se acercó, le pegó y se fue hacia Recoleta, donde hay un callejón y se sentó. Pensó que era su vida o la de ella. Se aseguró. Luego se fue a acostar. Ha vivido en la calle, pero siempre ha ayudado a sus hijos.

Al fiscal precisó que eran como entre las dos y media a tres y media de la madrugada, porque a esa hora llegan los camiones de la Vega. Estaba en una fogata con amigos, pero en un momento en Antonia López de Bello estaban las dos. Cuando le pegó los palos, “la rubia” la siguió igual. Fueron puntazos chicos que le pegó en la guata para que la dejara sola; llegó a interrumpirle una conversación. Mantenía una cuchilla de serrucho con la que cocinaba en la calle. “La rubia” se ponía a cachurear, vendía papelinas. Le compró dos o tres veces droga. Pensó que la iba a atacar o agredir porque le había pegado dos puntazos y unos palos. Aclaró que “la rubia” estaba hablando con un sujeto, pensó que estaba juntando con alguien para venir a pegarle, ahí fue que se dijo “voy a asegurarme, es ella o yo” y ahí fue y le pegó una puñalada, pero no sentía nada cuando le pegaba, llevaba tres días amanecida. Esa fue la tercera puñalada.

A la defensa respondió que luego de darle la última puñalada “la rubia” quedó sentada en el callejón, nadie le prestó auxilio, nadie le tomó importancia porque era muy agresiva, altanera. La otra persona que miraba era un drogadicto que pasaba en la esquina. Ella se levantó después diciendo que ella le pegó a “la rubia”, no recuerda a quién se lo dijo primero. En Recoleta con Santa María la PDI le sacó una foto, ahí se

devolvió a su carpa, empezaron a golpearle, decían “aló”, al ver un pantalón de PDI pensó “los ratis”, le dijeron usted mató a “la rucia” y el respondió que sí. Trajinaron la carpa y la dejaron sentada, ella los dejó, cooperó. Encontraron la cuchilla. Ella no se opuso en ningún momento. Después apareció su pareja y le dijo “maté a la rubia”. También lo llevaron a la PDI.

Agregó que llevaba como tres años en la calle y siempre ha sido comerciante. Finalizó diciendo que no fue su intención matarla, no estaba en su cinco sentidos, trató de recordar lo que pudo para declarar hoy.

QUINTO: Pruebas rendidas. Para sostener su imputación, el Ministerio Público presentó la siguiente prueba:

Testimonial: 1.- **Víctor Hugo Salamanca Talamilla**, cédula nacional de identidad N°11.853.243-0, viudo, operario, con domicilio reservado; 2.- **Nelson Javier González Vallejos**, cédula nacional de identidad N°13.146.597- 1, maestro de cocina, con domicilio reservado; 3.- **Germán Eduardo Tapia Coppá**, médico cirujano, Departamento de Medicina Criminalística de PDI, con domicilio en calle Williams Rebolledo N°1717, comuna de Ñuñoa; 4.- **Eduardo Guíñez Velásquez**, 29 años, soltero, Inspector de la Policía de Investigaciones de Chile, con domicilio en calle Williams Rebolledo N°1717, comuna de Ñuñoa; 5.- **Paz Ramírez Rodríguez**, 26 años, soltera, Subinspectora de la Policía de Investigaciones de Chile, con domicilio en calle Williams Rebolledo N°1717, comuna de Ñuñoa.

Documental: 1.- Certificado de defunción; 2.- Certificado de Alcoholemia N°21435-20; 3.- Examen Toxicológico N°T-8320-8324/20.

Pericial: 1.- **Marcelo Veloso Olivares**, médico forense del Servicio Médico Legal, con domicilio en Avenida La Paz N°1012, comuna de Independencia; 2.- informe escrito de la perito **Myriam Morales Poblete**, Sección Bioquímica y Biología de LACRIM.

Otros medios de prueba: 1.- fotografías del Informe de Autopsia N°3100-2020 del Servicio Médico Legal; 2.- fotografías de víctima y sitio del suceso, contenidas en Informe Pericial Fotográfico N°2172-020, de la perito fotógrafa María Soledad Antonucci González; 3.- imágenes contenidas en Informe Científico Técnico de Sitio del Suceso de PDI; 4.- Cuadro gráfico demostrativo de un cuchillo.

SEXTO: Alegatos de clausura, réplicas y palabras finales. En su clausura la fiscalía planteó que se probaron los hechos. La propia imputada explicó cómo atacó a la víctima; puede haber diferencias sobre el motivo, pero las lesiones en el cuerpo se condicen con el relato, le pegó con un palo, le dio dos puntazos, hay una herida defensiva además la principal. El ataque es unilateral, en dos ocasiones; la acusada se atrapó en sus propios pensamientos, la atacó y le dio muerte. No hay riña ni agresión ilegítima. Sólo sabemos de la

víctima que estaba en situación de calle, que cuando bebía o se drogaba su carácter era complejo, pero nada más. No hay testigos presenciales, pero la acusada le contó lo que hizo a otra testigo que fue ubicada por la PDI. Insistió en la condena.

La defensa insistió en la absolución por la versión de la acusada, quien fue agredida y ante el temor de las represalias atacó a Lorena Latín y la dejó en el lugar con vida. Declaró desde el comienzo de la investigación, permitió el registro de su carpa y el hallazgo del cuchillo. La víctima estaba bebida y drogada. Sobre lo que ocurrió antes la fiscalía sólo tiene testimonios de oídas. El cónyuge y pareja de la víctima hablan de una pelea, que era conflictiva y agresiva. Las lesiones defensivas no excluyen la legítima defensa, porque la occisa vendía drogas, no era querida en el sector. La agresión ilegítima no puede ser descartada. Al inminencia y proporcionalidad se satisfacen con el contexto, estaban a metros una de otra. Ya sea legítima defensa completa o incompleta por falta de proporcionalidad -ante la posibilidad de denuncia-, a todo evento la atenuante del art. 11 N°9 del Código Penal debe ser concedida.

En sus palabras finales dijo la acusada sentirse culpable, mal y arrepentida. Pidió disculpas a la familia de la víctima.

SÉPTIMO: Deliberación y veredicto. El tribunal deliberó después de haberse clausurado el debate de rigor, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 339 y 343 del Código Procesal Penal, y decidió en forma unánime condenar a la acusada Cavieres Cavieres como autora de un delito consumado de homicidio simple en la persona de Lorena Latín Quijada, cometido en la comuna de Recoleta el día 10 de noviembre de 2020. Los fundamentos entregados en aquella oportunidad se reproducirán y profundizarán a continuación.

OCTAVO: Análisis de la prueba y determinación de los hechos. Para llegar a la decisión recién apuntada, el tribunal ha tenido en consideración que la controversia estuvo acotada a si la acción desplegada por la acusada contra la víctima correspondió a una conducta homicida pura y simplemente, como plantea el Ministerio Público, o si se trató de una legítima defensa ejercida por la acusada. Esto responde precisamente a la verificación, desde los alegatos de apertura, de la existencia de coincidencia en la muerte de Lorena Latín Quijada por una conducta de la acusada en su contra, consistente en haberle asestado, entre otros golpes, una puñalada en la zona cervical que le causó la muerte. Más allá de la declaración de la acusada, que ha sido resumida en el considerando cuarto de esta sentencia, es importante establecer con qué pruebas el fiscal sustentó su hipótesis de cargo, que no fue controvertida en lo sustancial, para luego analizar si existe algún elemento de prueba que apoye la hipótesis alternativa planteada por la defensa y que redundaría en una eximente de responsabilidad penal.

Para ello se separará el examen de los hechos según los enunciados en que puede dividirse sintéticamente la imputación de la fiscalía.

I.- Hallazgo del cadáver y causa de muerte.

Al respecto se contó con la información recabada por la Policía de Investigaciones el mismo día, ante el hallazgo de un cadáver en la vía pública, en el bandejón central de avenida Recoleta.

Al respecto se oyó a los oficiales subinspectora Paz Ramírez Rodríguez e inspector Eduardo Guíñez Velásquez. Ambos coincidieron en que el 10 de noviembre de 2020 estaban de turno en la brigada de homicidios y debieron concurrir a Recoleta junto a un equipo, por una persona fallecida en la vía pública. En el sitio del suceso, avenida Recoleta frente a la numeración 116, en el bandejón central, se encontraba un cuerpo femenino que estaba de cúbito dorsal y que se identificó como Lorena Latín Quijada. Formaba parte del equipo el médico criminalista Germán Tapia Coppa quien examinó el cadáver, determinó la existencia de diversas lesiones, la principal en la región cervical, cortopunzante. En el mismo lugar hallaron un pantalón con manchas pardorrojizas al costado del cadáver y bajo la cabeza otras manchas del mismo tipo, de las que se tomaron muestras.

El propio doctor Tapia Coppa se refirió en juicio al examen de esta cadáver en su concurrencia el día 10 de noviembre de 2020 al sitio del suceso, Recoleta. Explicó que el cuerpo mantenía ropas ensangrentadas y desgarraduras, presentaba palidez de piel y mucosas, anémica. Sobre las lesiones, presentaba en su superficie heridas contusas, una cortante y otras cortopunzantes. Sobre las contusas describió equimosis violáceas localizadas en la cara posterior del codo derecho, en la cara antero interna del tercio medio del brazo izquierdo, en la cara posterior del tercio superior del brazo izquierdo, en la cara posterior del abdomen, flanco izquierdo y en el cuadrante superior externo del glúteo derecho. Todas tenían la misma coloración, salvo la del glúteo, que tenía color violáceo amarillento; la cortante era una pequeña y superficial en la cara interna de la falange media del dedo meñique de la mano derecha. Por su parte, las cortopunzantes eran tres: la primera y la segunda se ubicaban en la extremidad superior izquierda, en la cara anterior del tercio medio y en la cara externa del tercio superior; la tercera, que era la mortal, era una herida infiltrada y sangrante en la región cervical anterior izquierda, ubicada a 2 centímetros de la línea media anterior y a 5 centímetros sobre la proyección del manubrio del esternón; era profunda, de 3,3 centímetros de largo y que presentaba una escoriación lineal rojiza por su borde inferior.

El médico señalado estimó una data de muerte de aproximadamente entre seis y ocho horas, considerando que a las 11.28 horas se realizó el examen. Se planteó como causa posible de muerte un "traumatismo cervical por objeto cortopunzante". Para ilustrar sus dichos, se le exhibió el set fotográfico OTM N°3, respecto del cual precisó: 1.- es la víctima en la vía pública, una vez retiradas las vestimentas; 2.- plano posterior; 3.- acercamiento a la lesión cervical anterior por el lado izquierdo, con testigo métrico; 4.- equimosis codo y a la derecha herida cortante superficial presente en dedo meñique mano derecha, compatible con

lesión en patrón de defensa; 5.- son dos imágenes de la lesión cortopunzante del brazo izquierdo; 6.- tres imágenes del brazo izquierdo, cara anterior, equimosis y la segunda lesión cortopunzante de esa extremidad; 7.- plano posterior del tronco con equimosis tenue en tercio superior del hemitórax posterior izquierdo; 8.- escoriación lineal del tercio inferior, hemitórax posterior; 9.- dos imágenes de la equimosis violácea en cara posterior izquierda del brazo izquierdo, tercio superior; 10.- dos imágenes de la equimosis del flanco izquierdo, abdomen y glúteo derecho; 11.- vista general de la calzada norte del sitio del suceso.

Esta información recogida en el sitio del suceso fue coincidente con la autopsia posterior del cadáver. A ella se refirió el tanatólogo del Servicio Médico Legal Marcelo Veloso Olivares, quien examinó el cuerpo de Lorena Latín Quintana el 11 de noviembre de 2020. Describió que las lesiones que halló correspondían a equimosis distribuidas en la zona de los brazos, manos y muñecas; además de heridas cortantes en el brazo izquierdo, superficiales. La lesión principal era una herida cortopunzante a nivel de cuello, en la región cervical, cercana a zona glótica. Era de carácter cortante y penetrante, de 2,8 centímetros de ancho. Se ubicaba a 135 centímetros del talón y 2,5 centímetros lateral a la línea media hacia la izquierda. Al ser penetrante, seguía trayecto hacia abajo, seccionó la vena innominada, que trae sangre del cerebro y de la extremidad superior; luego penetró a la cavidad torácica por la cúpula pleural y ahí lesionó el lóbulo superior del pulmón izquierdo, generando un hemitórax de dos litros. El trayecto intracorporal fue de 16 centímetros, de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda.

Concluyó en base a esto que la causa de muerte fue una herida penetrante cérvico-torácica. Se le exhibió el set fotográfico OTM N°1, con imágenes de la autopsia, señalando: 1 y 2.- cadáver; 3.- equimosis en glúteo; 4.- rostro, se ve lesión principal en el cuello; 4.- lesión principal; 6 y 7.- dos heridas superficiales cortantes en brazo izquierdo; 8.- glúteo y parte posterior; 9.- cuero cabelludo, infiltración sanguínea, en la parte parietal izquierda y temporal derecha; 11.- trayecto intracorporal de la lesión principal, medido con instrumento.

Como corolario de la coincidencia de todas estas pruebas, el certificado de defunción de Lorena del Carmen Latín Quijada emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, consigna como fecha de muerte el 10 de noviembre de 2020, a las 04.00 horas, por herida penetrante cérvico-torácica.

Resulta palmario, de toda la prueba rendida sobre este punto y la falta de disputa, que la muerte de Lorena Latín Quijada fue causada por un tercero, en la vía pública, la madrugada del 10 de noviembre de 2020, con un arma cortopunzante con la que se le provocó una herida penetrante cérvico-torácica.

II.- Acción homicida perpetrada por la acusada.

La información recolectada desde el inicio de la investigación, la misma tarde, se dirigió a la participación de la acusada, sin perjuicio de que la reconoció también en juicio oral.

En concreto, la oficial Paz Ramírez describió varias diligencias que terminaron apuntando en esa dirección. Luego de referirse a la concurrencia al sitio del suceso y al examen del cadáver por el médico criminalista indicó que, según información recabada de testigos el hecho se inició en calle Antonia López de Bello frente al N°702, que fue fijado fotográficamente, aunque no se hallaron evidencias de interés. Después, tomaron conocimiento de una testigo que se presentó en la primera comisaría de Carabineros de Santiago, con información del caso. Se trataba de Daniela Lorca, a quien fueron a buscar y la llevaron a la brigada, donde declaró.

A esta declaración se refirió tanto la oficial Ramírez como el inspector Guíñez. Ambos coincidieron en que la testigo dijo ser vendedora ambulante en el mismo sector de Antonia López de Bello con Recoleta y que a las 08.30 horas de ese día fue a su lugar de trabajo y vio a la persona fallecida en el bandejón. Otros comerciantes le dijeron que era “la tía”, una mujer que vendía droga en el sector. Añadió que en horas de la tarde se le acercó una mujer apodada “pitufa”, de nombre Valeria, quien de forma espontánea le señaló “que se piteó a la vieja”, que sería la “tía”, de nombre Lorena. Le preguntó por qué lo había hecho y la “pitufa” le respondió que le había pedido a “la tía” que le regalara unos “monos”, que se había negado y por eso primero le pegó unos golpes con un palo y luego, con un cuchillo con serrucho, le hizo corte en el cuello, indicándole con sus manos el lugar de la lesión.

Con ello buscaron el apodo y nombre de la sindicada en las bases de datos policiales, determinando que se trataba de Valeria Cavieres Cavieres. Luego, confeccionaron dos set fotográficos y se los exhibieron a la testigo Daniela Lorca, quien la reconoció y les dijo que vivía en una carpa cercana y que estaba en situación de calle. Con esa información se dirigieron al sector ubicaron a Valeria Cavieres y la carpa donde vivía; ella permitió que revisaran la carpa y encontraron un cuchillo con hoja tipo serrucho de empuñadura blanca marca simanaggio y que mantenía manchas de color pardo rojizo. Se envió a peritaje bajo NUE, dada su coincidencia con la lesión. Dicho hallazgo fue ilustrado con el set fotográfico OTM N°4: 1.- interior de la carpa y justo al lado del encendedor se ve el cuchillo; 2.- cuchillo con manchas simanaggio; 3 y 4: cuchillo con testigo métrico.

Efectivamente esta arma fue sometida a peritaje, que se leyó en audiencia según acordaron los intervinientes conforme al artículo 331 letra b) del Código procesal penal, autorizado por el tribunal. Se trató de análisis bioquímico N°162-021 de fecha 10 de febrero de 2021, suscrito por Myriam Morales Poblete, profesional de la Sección Bioquímica y Biología de LACRIM. En él se da cuenta que se examinó la NUE 5986827, un cuchillo marca simanaggio, con un mango plástico de 9 centímetros y una hoja tipo serrucho de

12 centímetros, que presenta manchas de color pardo rojizo en su hoja, desde donde se levantó una muestra signada como “mpr hoja” y también se tomó una muestra “barrido empuñadura”.

Sometida a la prueba inmunocromatografía para detección de sangre humana la muestra “mpr hoja”, tuvo resultado positivo. De la misma muestra pudo extraerse ADN -mediante pruebas que detalla- que amplificadas mediante Reacción en cadena de Polimerasa (PCR), permitieron obtener marcadores genéticos autosómicos y concluir que “mpr hoja” presenta genotipo femenino. Luego, teniendo a la vista la huella genética y electroferograma de la muestra signada “Lorena LATIN QUINTANA” (del informe IPBB N°141/021) y comparándolo con el de “mpr hoja”, presentan coincidencia en 17 de los 21 marcadores genéticos autosómicos. El valor LR (razón o coeficiente de verosimilitud), indica que es 1.080.006.604.056.320 -mil ochenta billones seis mil seiscientos cuatro millones cincuenta y seis mil trescientas veinte- veces más probable observar la huella genética descrita para la muestra signada “mpr hoja”, si proviene del individuo del cual se obtuvo la muestra signada “Lorena LATIN QUINTANA”, que si proviene de otro individuo al azar de la población.

En resumen, se conoció a través de los testimonios de oídas de dos funcionarios policiales, que una testigo oyó el mismo día de los hechos el reconocimiento directo de la acusada de ser autora del crimen. Ante esto, se le ubicó y detuvo, encontrando en su poder y en la carpa que habitaba, un cuchillo con restos de material genético -sangre- que corresponden a la víctima, lo que permite determinarla como el arma homicida, al coincidir con el tipo de lesión y con los dichos de la propia acusada, tanto a esta testigo como en juicio, lo que redunda en su consideración como autora del crimen.

III.- Descarta hipótesis alternativa de legítima defensa.

Alegó la defensa y la acusada que obró bajo legítima defensa. El análisis de esta explicación alternativa requiere referirse a que el requisito de dicha eximente ya sea total o incompleta, es la existencia de una agresión ilegítima (Matus y Ramírez, p.330), entendida como *“el ataque de un ser humano que genera un riesgo objetivo para la persona o derechos de otro”*, que además debe ser *contraria a derecho y actual o inminente* pues, por lo mismo, quien se defiende pretende *impedirla o repelerla* (op. cit. 331-333).

De la propia declaración de la acusada en juicio se demuestra que no existió ataque alguno de la víctima en su contra. En efecto, dijo en juicio que luego que la víctima la siguió, ella la agredió con un palo en el cuerpo y en la cabeza -coincidente con las equimosis y contusión en el cuerpo y en el cráneo de la occisa- luego le dio un “par de puntazos” que se avienen con las dos lesiones cortopunzantes en el brazo izquierdo de la afectada y que posteriormente, dado que la víctima hablaba con otro sujeto, pensó que vendría a atacarla, por lo que fue y “se aseguró”, dándole la puñalada en la zona cervical que le causó la muerte. En rigor, no había ningún elemento que hiciera suponer o representarse un ataque inminente de la víctima a la

acusada, quien por lo demás había sido inmediatamente antes agredida por ella y que a continuación se acercó para ultimarla.

Además, se arguyó insistentemente que la víctima era agresiva, que era alcohólica y drogadicta. Es efectivo que estaba ebria y drogada cuando falleció: el certificado de Alcholema N°21435-20, de 25 de noviembre de 2020, del Servicio Médico Legal, referido a Lorena Latín Quintana, arrojó un resultado de 1,91 g/l. de alcohol en la sangre; mientras el examen toxicológico N°T-8320-8324/20 tuvo como resultado la presencia de cocaína.

Ahora, cabe preguntarse, ¿está una persona ebria y drogada necesariamente en una actitud o disposición agresiva permanente? Esa es una inferencia que carece de respaldo, podría perfectamente estar en una situación más vulnerable frente a un ataque. La evaluación debe ser en concreto. Al contrario, es llamativa, en sentido contrario, la multiplicidad de golpes que recibió y la existencia de una lesión defensiva en su dedo meñique; no obstante, a la acusada ninguna lesión se le constató ni se probó en el juicio la existencia de alguna.

Menos puede inferirse la supuesta agresividad genérica cuando se alcoholizaba, que se pretendió desprender del testimonio de quién era pareja de la occisa en ese entonces, el testigo Nelson Javier González Vallejos, quien ante la policía dijo que ese día Lorena se fue beber sola, que se ponía agresiva y violenta, “media problemática” y que era consumidora habitual de alcohol y drogas. Sin perjuicio, en juicio señaló que nunca la vio con algún arma, cuchillo, palos o fierros. Tampoco el testimonio del cónyuge de la víctima, Víctor Hugo Salamanca Talamilla aportó en ese sentido, pues de su declaración quedó claro que la relación con su expareja era distanciada, ya que ella estaba en situación de calle y cada tanto se contactaba con los tres hijos en común.

Por tanto, de lo analizado, no hubo apoyo alguno a esta hipótesis alternativa y que explicaría y eximiría al hecho de su carácter punible.

NOVENO: Hechos acreditados conforme al estándar de prueba. El estándar probatorio de duda razonable requiere que, de acuerdo con parámetros objetivos y precisos, exista prueba suficiente en términos de aportar un alto grado de confirmación a la hipótesis de cargo y, a su vez, descartar aquellas hipótesis compatibles con la inocencia del acusado.

A continuación, y de acuerdo al análisis de la prueba realizado en los considerandos anteriores, **es posible concluir que se encuentran probados los siguientes enunciados:**

“El día 10 de noviembre de 2020, en horas de la madrugada, Lorena Latín Quintana se encontraba en las inmediaciones de calles Antonia López de Bello y Recoleta, en la comuna de Recoleta, circunstancias en las cuales Valeria Carolina Cavieres Cavieres la golpeó y con un cuchillo que portaba la apuñaló en el cuello, causándole la muerte en el lugar.”

Este enunciado se encuentra respaldado por prueba que apunta en tal sentido, confirmándola, descartando la hipótesis alternativa compatible con la inocencia de la acusada, en específico aquella levantada por la defensa sobre la existencia de una legítima defensa. Por ende, estas premisas fácticas han sido acreditadas más allá de toda duda razonable, estándar probatorio establecido en el artículo 340 del Código Procesal Penal.

DÉCIMO: Calificación jurídica como delito de homicidio y participación punible. Decisión condenatoria. Para que se configure el delito de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391 N°2 del Código Penal, deben concurrir los siguientes elementos: a) un comportamiento, esto es, una acción u omisión dolosa llevada a cabo por el sujeto activo, dirigida a “matar a otro”, por cualquier procedimiento apto o idóneo para lograr éste resultado; b) un resultado material consistente en la muerte del sujeto pasivo del delito; y, c) un vínculo de causalidad entre la conducta homicida y la muerte de la víctima y que el resultado mortal pueda ser objetivamente imputable, esto es, pueda verse como la realización o materialización del riesgo típicamente relevante generado con la conducta desplegada por el autor del hecho.

En este caso se acreditó que la acusada Cavieres Cavieres fue quien asestó la puñalada mortal que causó la muerte prácticamente inmediata de la víctima, obrando dolosamente y sin justificación alguna. La prueba es clara en demostrar que el ataque con un arma blanca en una zona vital, potencialmente mortal, se concretó en un deceso. Además, el acusada mantenía en su poder el arma homicida y ha reconocido ser la autora de la conducta, al cumplir de propia mano con la descripción típica de homicidio.

UNDÉCIMO: Alegaciones sobre determinación de la pena. En la audiencia de determinación de pena la señora Fiscal indicó que solicita la pena de presidio mayor en su grado medio. Incorporó el extracto de filiación y antecedentes de la acusada, que registra: causa RIT 6.866/2017, 7mo. Juzgado de Garantía de Santiago, condenada como autora de tráfico de pequeñas cantidades de droga, el 6 de septiembre de 2017, a la pena de 61 de presidio menor en su grado mínimo y multa de un tercio de TUM, pena remitida y cumplida el 4 de octubre de 2018.

La defensa pidió reconocer la colaboración al establecimiento de los hechos que prestó su defendida en la investigación y en juicio, como una atenuante muy calificada. Con ello, pidió la rebaja en un grado de la pena e imponer cinco años y un día de presidio.

DUODÉCIMO: Acoge atenuante estimándola muy califica. En concepto del tribunal resultó evidente que la acusada colaboró al esclarecimiento de los hechos, en una forma especialmente valorable, conforme al artículo 68 bis del Código Penal. Primero, durante la investigación reconoció ser autora del delito ante una testigo que informó a la policía, facilitando con ello su ubicación y considerando la inexistencia de testigos presenciales. Luego, permitió el registro de la carpa que habitaba donde fue hallada el arma homicida. Por último, en juicio, reconoció que golpeó a la víctima varias veces y luego le asestó la puñalada mortal, facilitando con ello en forma importante el razonamiento probatorio del tribunal.

DECIMOTERCERO: Determinación de la pena, forma de cumplimiento y costas. La pena asignada al delito de homicidio simple es la de presidio mayor en su grado medio a máximo. Concurriendo una atenuante muy calificada, debe aplicarse la pena inmediatamente inferior en grado a la establecida para el delito, quedando entonces determinada por el presidio mayor en su grado mínimo.

Dentro de tal grado entonces, la pena puede recorrerse en toda su extensión, sujeta a los criterios del artículo 69 del Código Penal, que incluye una nueva evaluación de las modificatorias y la extensión del mal causado por el delito. Estima el tribunal que el ataque especialmente violento sobre la víctima, reflejado en la multiplicidad de lesiones que sufrió, mediante el uso de un palo y un arma blanca, reconocido por la propia acusada, hacen proporcional al hecho concreto una pena superior al mínimo del grado.

El cumplimiento de la pena corporal será efectivo, por la pena impuesta.

Se le eximirá del pago de costas al ser patrocinada por la Defensoría Penal Pública y encontrarse privada de libertad.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 1°, 3, 7, 11 N°9, 14 N°1, 15 N°1, 21, 24, 25, 28, 50, 63, 68, 68 bis, 69 y 391 N°2 del Código Penal; 47, 295, 296, 297, 340, 342, 344, 346, 348 y 455 del Código Procesal Penal; **se declara:**

I.- Se condena a VALERIA CAROLINA CAVIERES CAVIERES, ya individualizada, a sufrir **una pena de OCHO AÑOS de presidio mayor en su grado mínimo**, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, además de la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por ser **autora del delito consumado de homicidio simple**, sancionado en el artículo 391 N°2 del Código Penal, perpetrado en la comuna de Recoleta el día 10 de noviembre de 2020, en la persona de Lorena Latin Quijada.

II.- El cumplimiento de la sanción corporal se realizará en forma efectiva en el recinto que determine Gendarmería de Chile.

Se considerará como abono el tiempo en que ha permanecido ininterrumpidamente privada de libertad, por detención y prisión preventiva, desde el 10 de noviembre de 2020 y hasta que la sentencia quede ejecutoriada, de mantenerse la medida cautelar.

III.- Se exime del pago de las costas de la causa a la sentenciada.

IV.- Deberá determinarse y obtenerse, a través de Gendarmería de Chile, la huella genética del sentenciado, conforme lo prescribe el artículo 17 de la ley 19.970.

En su oportunidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales y artículo 468 del Código Procesal Penal, remítanse los antecedentes necesarios al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, para la ejecución de la pena.

Se deja constancia que, para los efectos de la publicación de esta sentencia en el sitio web del Poder Judicial, no hay datos que proteger.

Regístrese.

Redactó el juez don Raúl Díaz Manosalva.

RIT 35-2024

RUC 2001144474-2

Código delito (702)

Dictada por la sala del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrada por los jueces don Matías de la Noi Merino, doña Denisse Ehrenfeld Ebbinghaus y don Raúl Díaz Manosalva, todos titulares.